



ACADEMIA CHILENA
DE CIENCIAS SOCIALES
POLÍTICAS Y MORALES

DEBATE DE LAS CAUSAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Por Cristián Zegers Ariztía

Debido a inconciliables visiones contrapuestas, en el debate actual sobre el 11 de septiembre de 1973, él aparece demasiado a menudo como un hecho sin causas precisas en torno a las cuales concordar siquiera mínimamente, y que, en todo caso, debe ser declarado injustificable. Pero sin examinar lo que provocó el quiebre de la democracia, lo que llevó a Chile a su peor crisis política en el siglo XX, ¿cómo cautelar la democracia actual, y cómo preservarla en el futuro? Cuando se postula un “Nunca más”, lo prudente sería desprenderse de la ilusión de un efecto sin causas.

La perspectiva de medio siglo permite, cuando menos, estimar que culminó entonces una crisis extendida del Estado chileno, marcada desde fines de los años sesenta por el uso creciente de la violencia como instrumento político. Y ese conflicto se agudizó bajo el gobierno de la Unidad Popular, sumándose a otras duras circunstancias que generaron profundas reacciones en la población. En el acontecer previo al 11 de septiembre, la crecientemente masiva percepción de una realidad que se tornó angustiosa, pesó incluso

más que las formaciones partidistas. En el análisis desde entonces no se ha reparado suficientemente en ello.

Esos meses de 1970

Desde su comienzo, el gobierno allendista se empeñó muchas veces en despejar la incertidumbre acerca de su respeto a la democracia, pero se contradijo otras tantas. Afirmaciones como la del secretario general del PC, Luis Corvalán, —“Tenemos el deber de transformar en irreversible el proceso al socialismo”— horadaron cualquier credibilidad. Hubo muchísimas de tenor parecido. Con todo, inicialmente cabía la duda, aunque desde las primeras semanas después de la elección de Allende un vasto sector de la población creyó que el nuevo gobierno impondría la revolución marxista a todo trance, y que, debido a su estrecha mayoría electoral, lo haría junto con asumir el poder o poco después, incluso con cierre de fronteras, como siempre se había ejecutado en Europa central o el sudeste asiático. Este temor disminuyó en parte una vez aprobado el pacto de garantías constitucionales entre la DC y la UP.

Allende se sentía llamado a establecer en Chile un régimen socialista, pero distinto de las sangrientas dictaduras surgidas en la Guerra Fría, derivadas de una revolución interna violenta, apoyada por fuerzas extranjeras de igual orientación. Él, en cambio, optaba por lo



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

que llamó “la vía chilena” al socialismo, basada en medios pacíficos; a su juicio, era una opción también considerada por Marx.

El clima ciudadano, muy alterado antes del traspaso del mando —recuérdese al ministro de Hacienda advirtiendo el retiro de los depósitos bancarios— determinó reacciones patéticas miradas con ojos de hoy. Por ejemplo, aquellos sectores pudientes que malvendieron en 48 horas sus casas y bienes de todo tipo hasta para explotar tristemente un lavaseco en Argentina, Ecuador o España; o bien, las promesas personales de salvoconductos a parientes o amigos por dirigentes de la Unidad Popular, por si advenía lo peor de la frontera cerrada. Y las maniobras de irrealista ingeniería política que se contemplaron por algunos, como el “gambito” (elegir a Alessandri en el Congreso Pleno, y que éste renunciara para designar a Frei en nuevas elecciones). En fin, lo peor: aquellos dos microgolpes, de características trágicas uno —el secuestro del general Schneider que terminó en su muerte—, y la asonada militar apoyada por la CIA de algunos altos oficiales encabezados por el general Valenzuela, un casi sainete que abortó y culminó con la devolución de fondos a los estadounidenses.

Un recuerdo personal: en este ambiente sobreexcitado, asistí a la primera parada militar presidida por Allende, y presencié una ceremonia republicana impecable: las brigadas y eslóganes revolucionarios se habían hecho invisibles. Pero ese cuidado inicial por disimular los tonos agresivos resultó imposible de mantener. Y tampoco era ocultable la semitolerancia para con los grupos violentos más extremos, como el MIR y la VOP —que medio año después asesinaría al exministro Pérez Zujovic—; indultados por el Presidente Allende entre sus primeros actos de gobierno, ellos siguieron operando a mansalva en asaltos a bancos e instalaciones de todo tipo. El líder mirista Miguel Enríquez proclamó el “fin de ciclo de ilusiones reformistas” y que habían “terminado por imponerse las leyes de hierro de la lucha de clases”.

En la oposición a la UP, la Democracia Cristiana, muy inclinada a la izquierda por la candidatura Tomic, varió hacia el centro. La derecha pasó a la virtual irrelevancia en esos primeros días críticos; culturalmente derrotada y no obstante haber obtenido apenas 34 mil votos menos que la primera mayoría relativa de Allende, dejó tirado su rol de segunda fuerza —que asumió la DC, tercera en los cómputos—, cuando su candidato Alessandri se refugió en la privacidad y el comando de su candidatura fue disuelto. Nadie se hizo responsable del clima creado por aquellas encuestas Gallup que predijeron la victoria del candidato de derecha hasta casi la apertura de las urnas, y



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

tampoco tuvo padrinos el torpe rechazo de la enmienda constitucional para una segunda vuelta electoral. El Partido Nacional demoró en retomar el bastón conductor del sector, afectado por haber acatado la obsesión del comando alessandrista —técnicos y empresarios— de acentuar la imagen de una candidatura independiente.

En los casi tres años que se prolongó el enconado enfrentamiento político posterior en el Congreso, en la prensa y la calle, no hubo un vencedor claro. La oposición DC-PN-DR (a la cual se sumaron más tarde grupos desgajados de la UP, como el PIR) ganó todas las elecciones complementarias de parlamentarios fallecidos, pero el gobierno prácticamente no encontró freno para avanzar hacia el control económico total usando los resquicios legales diseñados por Eduardo Novoa, y también mediante los decretos de insistencia.

Los tres grandes frentes

En esa suerte de empate político —bien reflejado en las elecciones municipales de marzo de 1971—, otro movimiento que sería determinante comenzó en tres grandes nuevos frentes abiertos por políticas extremas de la UP.

El primero fue el desabastecimiento de alimentos y productos esenciales, a raíz de la política económica de *shock* del ministro de Economía, Pedro Vuskovic. El drástico aumento de la masa monetaria y del poder adquisitivo generó artificialmente una sensación de bienestar como vía para obtener la mayoría necesaria para imponer la revolución. El esquema funcionó al comienzo: oficialmente se lo justificaba con copar la capacidad instalada de la industria, aunque tempranamente (6 de mayo de 1971) Vuskovic tuvo que desmentir que hubiera desabastecimiento. Si lo hay, dijo, “nada tiene que ver con la producción, sino que se debe a que determinados sectores acaparan los productos”. Este discurso contrario a toda evidencia se mantuvo hasta el final. Desde 1972 el desabastecimiento generalizado afectó de modo crítico a la población, al decretarse precios fijos irreales y crear el Gobierno una gigantesca red de distribución de alimentos y productos, las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP), con funcionarios y delegados, reclutados entre militantes de confianza de los partidos oficialistas, muchos de los cuales terminaron por corromperse cuando el desnivel de los precios oficiales con los del mercado negro se hizo irresistible. Evaluando esto posteriormente, el expresidente Frei denunciaría a las JAP como “un paso definitivo hacia el control totalitario de la nación”.

El desabastecimiento y su correlato —una suerte de economía paralela de emergencia para producir alimentos— motivó la primera



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

protesta callejera de mujeres de la oposición, “la marcha de las cacerolas vacías” en los últimos días de la visita de Fidel Castro. La larga visita “inspectiva” del líder cubano dejó en claro sus diferencias con la “vía pacífica al socialismo” que Allende postulaba —un experimento en el cual Castro no confiaba y en el cual tampoco creían el Partido Socialista ni los grupos más extremos de la izquierda chilena.

El segundo frente, en buena medida superpuesto al primero, fue la percepción, creciente hasta ser masiva, de una ilegalidad rampante, a la que el Gobierno no podía o no quería poner atajo. Así se señaló desde lo más alto, la Corte Suprema (Allende devolvió sin pronunciarse el sobre con su duro reclamo), hasta los más modestos afectados. Al respecto, tenemos una descripción de Radomiro Tomic, clave en la asunción de Allende al poder, y que siempre abogó por la unidad con la izquierda. En el Consejo Nacional de la DC en Cartagena (marzo de 1972) vertió su juicio acerca de la ilegalidad generalizada en los siguientes términos: “(...) Debilidad suicida con que deja (la UP) difundirse la impresión de que el gobierno carece de voluntad política” ante “el rosario inacabable de ‘tomas’ de fundos, de parcelas, de poblaciones, de terrenos con otros adjudicatarios, de oficinas comerciales, de empresas, de minas, de escuelas, de liceos,

de edificios públicos, de caminos, de puentes, etc.”. (...) Multiplicadas por decenas y centenares de casos, semana tras semana y mes tras mes, tienen un efecto devastador para el gobierno y la moral ciudadana”¹.

En fin, cuando el ministro de Educación Jorge Tapia proclamó en marzo de 1973 la decisión de implantar ese año la Escuela Nacional Unificada (ENU), el Gobierno no tuvo cabal conciencia de su enorme alcance negativo, que en los siguientes dos meses acentuó en su perjuicio el desbalance de fuerzas. Ese proyecto contrariaba flagrantemente el pacto de garantías constitucionales de 1970 (la educación impartida por el sistema nacional de educación no podía tener orientación partidaria oficial), en tanto que la ENU planteaba como objetivo el “desarrollo armónico de la personalidad de los jóvenes en los valores del humanismo socialista”.

La eventual implantación de la ENU movilizó el rechazo tajante de tres poderosas influencias en los sectores medios y el mundo popular. Primero, la educación privada, en la cual jugaban un papel clave profesores, técnicos y organizaciones demócratacristianas, y que vieron el fin de su autonomía; segundo, la Iglesia Católica, defensora de la libertad de enseñanza (según el cardenal Silva Henríquez, fue el “peor problema” que enfrentó), y, tercero, algo

¹ “Tomic: Testimonios”, Coedición de Editorial Emisión, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos y Ediciones Copygraph, Santiago, 1988.



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

potencialmente explosivo: el primer disentimiento explícito de las FF.AA. a una iniciativa gubernamental, detonado por el propio ministro de Educación, que reunió a 150 oficiales para debatir el proyecto. Finalmente, el Presidente Allende tuvo que acceder a la enérgica petición del cardenal Silva de postergarlo; fue archivado, pero el daño al Gobierno ya estaba hecho.

La pregunta central

Los pronunciamientos concordantes que precedieron a la intervención militar desde todos los poderes del Estado (“quebrantamiento del orden constitucional y legal”, sostuvo el acuerdo de la Cámara de Diputados) expresaron un clima social. La base ciudadana se involucró enardecidamente a favor o en contra. Recuérdese que en julio de 1973, el Congreso había aprobado la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía; Allende la vetó; la mayoría absoluta parlamentaria rechazó el veto, y le envió el texto para ser promulgado. El Presidente recurrió al Tribunal Constitucional, que ordenó la publicación del texto aprobado por el Congreso; Allende mandó entonces a la Contraloría un texto parcial, que no fue cursado por ella.

¿Quién se apartó primero de la Constitución? Hoy tenemos una aceptación generalizada de que nunca es legítimo interrumpir la democracia por la fuerza, pero establecer cuándo y cómo ello tuvo lugar en Chile, es tarea más compleja que simplistas visiones ideológicas. Son muchos los factores a tener en cuenta; por de pronto, el miedo que ambos sectores polarizados y enfrentados tenían respecto de las posibilidades de su contrario para imponerse totalmente y para siempre.

Gonzalo Vial consideraba historia-ficción la creencia de que una mejor disposición de los actores políticos hubiera evitado el golpe. Se fundaba para ello no sólo en el encarnizado apasionamiento existente en 1973, sino en el caos económico reinante. Impedir el desastre definitivo, según Vial, con un 600% oficial y un 1.000 % real de inflación, “exigía medidas dolorosísimas, que ninguno de los bandos en pugna hubiera tenido la fuerza ni voluntad —dadas sus consecuencias políticas— para imponer. En otras palabras, exigía una dictadura”². Podemos compartir o discrepar de esta opinión del historiador, apenas un ángulo del problema, pero los juicios sobre el 11 no han logrado penetrar del todo las razones —enmarañado tejido para las mentes civiles— de por qué resolvieron las FF.AA. intervenir.

² Vial, Gonzalo, en “Enigmas del 11 de septiembre (I), La Segunda, 5 de septiembre de 2000, “Inevitabilidad del golpe”.



Percepciones militares

Los tiempos de las percepciones militares no se acompañan necesariamente con los del país, y menos aún en esos años. El Presidente Allende se ocupó personalmente de atender los requerimientos militares y de dar a las instituciones armadas mayor dedicación que cualquiera de sus antecesores. Por conveniencia obvia, su gobierno cuidó de que el desabastecimiento imperante no golpeara a los militares y sus familias, lo que fue posible, al menos parcialmente, por los canales de distribución militar.

Pese a ello, desde el paro de octubre de 1972 la oficialidad comenzó a sentirse usada por el Gobierno y, en paralelo, conminada a reaccionar por la población civil, que incluso los encaraba en la calle. Recurrentemente, algunos de sus altos mandos fueron llamados a integrar ministerios para salvar la emergencia. Después operó una coordinación de 15 generales de las tres ramas, cuyas raíces de confianza venían de los cursos de Estado Mayor, y que más adelante resultó decisiva para elaborar aquellos instructivos de seguridad del Estado Mayor de alcance ambiguo: necesarios dadas las críticas circunstancias de agitación, pero también con capacidad para controlar el país.

Es conocida la incidencia en la viabilidad del pronunciamiento que tuvo la renuncia del comandante en jefe del Ejército, general Prats, luego del “incidente de la Costanera”, que dejó patente su desvinculación con el sentir de la mayoría del cuerpo de generales. Al ascender a la titularidad el general Pinochet, para muchos generales era una incógnita cuál sería su definición final, únicamente develada 48 horas antes del golpe, cuando él se enfrentó a la notificación de la Armada y de la Fuerza Aérea. En su recorrido a las guarniciones en las semanas precedentes, Pinochet captó sin duda el sentir casi unánime de la oficialidad, de la cual también participaba buena parte de la suboficialidad, y su decisión final tuvo ese origen.

Mucho menos en cuenta se ha tenido, sin embargo, la sensibilidad de las FF.AA. hacia el peligro exterior, evidente en el apresto armamentístico de Perú en vísperas del centenario de la guerra del Pacífico (400 tanques de origen soviético y moderna dotación aérea), y cuando, además, saltaba a la vista que el arbitraje inglés del Beagle podía desembocar en un reconocimiento de derechos chilenos que Argentina no acataría —lo que sucedió apenas cinco años más tarde, con una guerra que estuvo a horas de estallar—. En cualquiera de esos casos, la debilidad chilena resultante de la guerra civil y de la eventual división de las FF.AA., era un riesgo vital que las instituciones armadas no estuvieron dispuestas a aceptar.



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

En algún momento, pues, la silenciosa sensibilidad militar iba a coincidir con la ebullición reinante en la sociedad civil.

Ya un año antes de la intervención militar, la desafección de la sociedad civil se había manifestado de modo patente en el largo apoyo al paro de octubre de 1972. Al alineamiento partidista tradicional se superpuso una mayoría inédita, cuyo fondo aglutinador —demanda de orden— resultó inconciliable con el curso del país hacia una vorágine de conflictos descontrolados en todas las áreas. Este choque afectó lo más primario del modo de vida chileno, y la ciudadanía común no pudo asimilarlo.

Espera fatalista

Los remecedores impactos diarios en esos “mil días” enardecieron de tal modo la percepción general, que en uno y otro bando desaparecieron las visiones mínimamente objetivas y, sobre todo, una común disposición a colaborar. Una agobiante acumulación de situaciones materiales y psicológicas terminó por imponer, paradójicamente, una espera fatalista de casi cualquier final que pusiera fin a la crisis. Patricio Aylwin aseguró haber sentido “alivio” el 11: “La tensión espantosa que el país vivía el 73 no daba para más”.

El terremoto en ciernes no era un devenir inescapable, pero no hubo fuerzas ni voluntad para impedirlo. La fractura social y el derrumbe de la democracia pueden parecer incomprensibles medio siglo después, pero entre quienes lo vivieron, un desenlace brutal en uno u otro sentido era esperable, dado el curso de los acontecimientos.

En el recién publicado libro de sus memorias inéditas, el expresidente Aylwin da su versión de la “reunión cumbre” entre él —líder entonces de la oposición— y el Presidente Allende en casa del cardenal Silva Enríquez. Aylwin exhorta a Allende a un cambio total para superar la crisis y le reprocha el haber ofrecido construir el socialismo en democracia, pero al cabo de tres años (usted) “no ha construido el socialismo, ha destruido la democracia, ha arruinado la economía y ha puesto en riesgo la seguridad del país”.

Tras el fracaso de esa última reunión, Allende manifestó acentuadamente a sus íntimos y a jefes políticos su determinación de morir en la casa de gobierno si la crisis llevaba a su derrota. A él, Jefe del Estado, le cabía la principal responsabilidad de evitar ese final wagneriano (como se rotuló en el extranjero), pero en esas críticas semanas finales actuó como si los dados estuvieran echados, más allá de concebir un plebiscito de última hora que nunca llegó a



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

materializarse. Aylwin le había pedido una decisión que Allende no podía adoptar, consciente de que cualquier movimiento conciliatorio requería por pacto de la UP la unanimidad de sus partidos, con la cual no contaba.

El empeñamiento en negar el complejo entramado de razones internas que provocaron el 11 —posición constante del Partido Comunista— es un intento entendible pero pueril de ocultar el fracaso del gobierno de la UP. Impidiendo el debate se busca postular una causa única del derrumbe, supuestamente empujado desde el exterior y ajeno a la responsabilidad de los gobernantes. Pero el paso del tiempo hace cada vez más insostenible esta versión del 11. El análisis documentado de la caótica situación que lo desató, y el escrutinio de ese día, desvirtúan el simplismo de achacar el derrocamiento de Allende a la mera intervención de la CIA —la hubo, pero de alcances no decisivos—, o al clásico complot de Guerra Fría, o a la alianza de intereses oligárquicos criollos con las multinacionales.

La intervención

Lo que muestra la actuación militar es una operación castrense de manual, bajo un secreto de ordenanza. No hay señal de

conspiradores vinculados a políticos, ni menos de complotados obedientes a fuerzas externas. El gobierno estadounidense, y obviamente la CIA, desconocieron los pormenores del golpe, su fecha exacta y sus jefes implicados. Esto es lo real. Ninguna evidencia ha logrado desmentirlo en cinco décadas. Hace poco, Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria, ha dicho: “Es bueno salirse del mito de que fue una revolución maravillosa, que fracasó por culpa del imperialismo”.

Más allá de mitos, en el complejo de circunstancias que desencadenaron el 11 los sentimientos colectivos antes referidos pesaron determinadamente e hicieron que el golpe fuera viable. Además, hubo factores coadyuvantes de una y otra parte, que en 50 años han ido siendo expuestos por sus protagonistas. Inestimable es la autocrítica de muchos líderes de la UP, que aportan a una más completa interpretación de los hechos, ejemplo de la cual es la reciente afirmación del exsenador y exministro socialista Carlos Ominami en cuanto a que “el 11 tuvo apoyo popular”.

El golpe militar o la eventualidad de una guerra civil, con dictadura del proletariado en caso de triunfo marxista, era anticipado mucho tiempo antes. El Presidente Allende previno acerca del primero desde el paro de octubre de 1972; en julio de 1973 los obispos católicos alertaron sobre una “hora dramática... para evitar una lucha



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

armada”; y el mismo 11 alcanzó a ser el titular del diario comunista “El Siglo”: “Cada cual a su puesto de combate”. Allende conversó incansablemente de ello con los jefes de la Unidad Popular —dramáticamente con Altamirano, secretario general del PS, que impedía cualquier conciliación—, y lo debatió francamente con opositores prominentes, como el senador Pedro Ibáñez, en el palacio de Viña del Mar. El caudaloso debate público sobre un eventual golpe o una guerra civil —una situación insólita, elocuente del creciente deterioro democrático— caracterizó el tiempo político anterior al golpe. La documentación al respecto es abundantísima.

Valga aquí ilustrarlo con un dato inédito: en la edición de la revista “Que Pasa” que debió circular el 13 de septiembre y que quedó semiimpresa en la noche del martes 11, lo más revelador era la sección “Cara a la Opinión”, en que cruzaban espadas columnistas de gobierno y oposición, figuras principales de ese momento. En este ejemplar, que nunca salió a la calle, se contestaba una decidora pregunta formulada por la diputada socialista Carmen Lazo: “Si Chile se ve abocado a un golpe de Estado, ¿qué actitud tomará Ud., teniendo en cuenta que nuestra tradición ha sido tener gobiernos legítimamente elegidos?”.

Allende sin duda estaba consciente de esta inminencia, aunque nunca previó la unidad de la intervención militar, y hasta esa mañana de su último y dramático discurso por Radio Magallanes, partió de la base de la división del Ejército, la rama más poderosa, con una mitad o más apoyándolo. Y no lo previó porque en su ocurrencia sólo advertía una motivación política, en circunstancias de que ella obedeció a razones predominantemente militares.

Las instituciones armadas actuaron por la conciencia de estar perdiendo el monopolio constitucional de la fuerza, y de caminar a la guerra civil, bajo la amenaza de los cordones industriales semimilitarizados, y de las armas y los efectivos de la revolución castrista ingresados ilegalmente; fenómenos estos cuya dimensión les era imposible conocer y cuantificar, por contar con la complicidad del Gobierno. El mundo militar enfrentó la violación del punto neurálgico de las garantías suscritas en 1970 con la DC, el monopolio de la fuerza, constitucionalmente radicado sólo en ellas y las policías, teniendo en cuenta que desde el GAP presidencial hasta el MIR, sin excluir a las brigadas del PC y del PS, se hizo progresivamente alarde de que el régimen contaba con numerosas fuerzas irregulares armadas. Hoy es evidente que la jactancia para amedrentar a la oposición democrática no servía para vencer al poder militar, pero ella asumió preeminencia en los días finales, ostensible, por ejemplo, en la



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

famosa afirmación de Altamirano en el Estadio Chile, el 9 de septiembre: “Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico”.

Hacia una visión más compartida

Hemos intentado separar en estas líneas la visión sobre los hechos de la intervención militar de aquella sobre los 16 años y medio que siguieron. Una valoración global del gobierno de Pinochet aún necesita más tiempo para alcanzar la ecuanimidad necesaria de un enfoque útil. Probablemente no ocurrirá a corto plazo, como lo muestra la viva polémica en esta conmemoración de los 50 años. Entretanto, ¿cuáles serían algunos mínimos que nos aproximen en el futuro a una visión más compartida acerca de esta gran fractura histórica? A mi juicio, ante todo, la condena absoluta de la violación de los derechos humanos que consta en el informe Rettig. La máquina de aniquilación de adversarios que desató Manuel Contreras en la DINA ocurrió bajo la responsabilidad de Pinochet, supiera él o no sus pormenores. Además de innecesaria para la supervivencia del consolidado régimen militar, permitió venganzas de civiles ajenos a los servicios de seguridad, consumadas por revancha violenta a los atropellos y violaciones a esos mismos derechos sufridos por esos grupos, agricultores en especial, bajo la UP. Esta pesada, insalvable

sombra moral, junto con la rendición engañosa de fondos reservados del gobernante, será siempre condenable en la historia y tradición chilenas. Y, sin duda, seguirán siendo objetables restricciones de las garantías individuales básicas, como el exilio o limitaciones de información, que carecieron de justificación en los tiempos en que fueron aplicadas.

En el juzgamiento político global, en el haber se levanta una obra de la cual gozamos hasta hoy: la modernización económica y social, que nos convirtió en un país de clase media y con un proceso de disminución radical de la pobreza. Desde la total ruina económica de septiembre de 1973, la liberación de precios y aranceles aduaneros sentó inicialmente las bases de política y gestión que sacaron a Chile de los últimos puestos hasta la supremacía en el continente latinoamericano; merced, asimismo, a la política económica continuada en sus rasgos esenciales por los gobiernos de la Concertación democrática.

Y hay más: el mejoramiento singular de los indicadores de nutrición, salud, y escolaridad; la colonización de las zonas aisladas; el arranque a la multiplicación de universidades —una verdadera escuela de igualdad— y, ciertamente, la conducción personal por Pinochet del conflicto austral, que nos salvó de una guerra injusta, que habría traído desolación irreparable y muchas décadas de retraso y



ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES POLÍTICAS Y MORALES

revanchas sin fin a ambos países. Habiendo sólo una mínima porción de ellas participado en el gobierno, las instituciones armadas conservaron sus estructuras profesionales y no requirieron ser depuradas al advenimiento de los gobiernos democráticos.

Pero con todo lo definitorio que esto ha sido para Chile, no compensa ni justifica la caída moral de la extendida, cruel e inútil violación de los derechos humanos.

Se ha reconocido en el mundo la ejemplaridad de la transición chilena, pacífica y normada como la española. No puede olvidarse que el régimen de Pinochet, pese al total control por éste, no fue nunca homogéneo, salvo en sus inicios. Desde temprano convivieron en él sectores “duros y blandos”, como se les llamó, básicamente por sus activas posturas frente al restablecimiento de una democracia real. En su fase final, destacados civiles trabajaron para sacar adelante desde el Gobierno las leyes políticas y para hacer posible, primero, un plebiscito con plenitud de libertad política e informativa, y, luego, reformas constitucionales esenciales. A partir también del Acuerdo Nacional (1985) casi todas las formaciones y partidos políticos democráticos de derecha, centro e izquierda concordaron bases medulares que hicieron factible la transición. La renuncia explícita a la

fuerza y la valoración de la democracia reflejaron esa renovación, y de allí surgió asimismo la voluntad exitosa de la centroizquierda en los gobiernos de la Concertación.

Los historiadores seguirán profundizando en la apreciación de esa época de ideologismos encarnizados, en la cual se pasó del poder aparentemente inmovible de la Unión Soviética sobre casi la mitad de la humanidad, a la caída del Muro y al derrumbe posterior del imperio comunista. Chile, un último y alejado peón de este tablero, por impulso de su mayoría ciudadana, pugnó siempre por defender la libertad, condición para la democracia.